



Countdown 2030


EUROPE

Advance human rights
Invest in family planning



Los derechos bajo presión:

Por qué las fuerzas progresistas de Europa seguirán luchando por los derechos sexuales en las políticas y los programas de desarrollo

A photograph of three young girls standing in front of a brick wall. They are wearing school uniforms consisting of white short-sleeved shirts and dark skirts. The girl on the left is looking directly at the camera with a neutral expression. The girl in the middle is looking down at something in her hands. The girl on the right is smiling slightly at the camera. The entire image is overlaid with a semi-transparent blue filter.

Las crisis y el conservadurismo están poniendo en peligro la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Es el momento de reafirmar el lugar de estos derechos en el desarrollo y no de arrebatárselo, afirman los gobiernos progresistas de Europa.

El año 2020 está suponiendo un momento delicado para la salud y los derechos sexuales y reproductivos (SDSR).

La crisis global desencadenada por la pandemia de COVID-19 hace peligrar los logros conseguidos tras años de duro trabajo en favor de la igualdad de género y la SDSR, y amenaza con relegar estos ámbitos al final de la cola en las agendas de desarrollo. La crisis climática, los conflictos, las cifras récord de personas desplazadas y el resurgimiento de fuerzas ultraconservadoras también ponen en riesgo la SDSR y comprometen por tanto el bienestar de miles de millones de mujeres y niñas y de la sociedad en general.

Mucho antes de la llegada del COVID-19, los gobiernos progresistas de Europa estaban a la vanguardia de las acciones de apoyo a la salud y los derechos sexuales y reproductivos en el mundo. Hoy, a medida que la crisis empeora en múltiples frentes, se está luchando por proteger los presupuestos y el espacio sin los que será imposible hacer que estos planes sobrevivan (y mucho menos prosperen).

De grandes esperanzas a estado de crisis

En enero de este 2020 el panorama era esperanzador. El 2019 había terminado en alto, con una serie de avances políticos. En Septiembre, [58 países respaldaron una declaración de Naciones Unidas que reconoce a la salud y los derechos sexuales y reproductivos](#) como una de las «piedras angulares» de la cobertura sanitaria universal, una iniciativa dirigida a reducir drásticamente los costes de los servicios para miles de millones de personas.

Dos meses después, en la [Cumbre de Nairobi](#) (coauspiciada por el Fondo de Población de Naciones Unidas, Kenia y Dinamarca), 55 países se unieron para firmar una [declaración conjunta sobre la igualdad de género y la salud y los derechos sexuales y reproductivos](#) que fijaba claros objetivos para asistir a los 4.300 millones de personas que no tienen acceso a servicios adecuados de salud sexual.

La oposición había sido constante y agresiva, pero la sensación era optimista: la tinta de los memorándums ya se había secado y empezaba un nuevo día. Había llegado el momento de que los gobiernos hicieran honor a sus compromisos políticos y económicos.

Hoy parece que ese mundo fuera otro. La pandemia del COVID-19 ha convertido el 2020 en un año de confusión y tragedias, con una contracción y un colapso económicos precipitándose a toda velocidad según avanza la enfermedad. En este mundo intrincadamente conectado y globalizado, pocas personas han quedado ajenas a sus secuelas: la pandemia ha agravado las desigualdades sanitarias, sociales y económicas en todos los continentes, y continúa haciéndolo sin tregua.

Después de que el huracán Idai azotara Mozambique, el acceso a la planificación familiar se volvió un bien escaso y fue necesario que actuaran las ONG.

Imagen: IPPF/Isabel Corthier



Fuego contra la salud y los derechos sexuales y reproductivos

El daño que el COVID-19 ha causado sobre la salud y los derechos sexuales y reproductivos es múltiple y trágico, y va camino de acelerarse.

El acceso a la planificación familiar y los servicios de salud sexual, complicado ya para muchas personas en las mejores épocas, es ahora todavía más difícil debido al cierre de clínicas en todo el mundo. En junio, la Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF) informó de que 52 de sus organizaciones miembro consideraban los recortes de sus servicios como «críticos o graves», con desabastecimiento de anticonceptivos, interrupciones en la cadena de suministros, despidos y cierres de clínicas.

Miles de clínicas móviles y puntos de asistencia médica comunitarios (la espina dorsal de los servicios de salud sexual y reproductiva o SSR en muchos países de renta baja) se han visto forzados a cerrar en África, Asia y América Latina.

Mientras tanto, los grupos de presión y gobiernos conservadores han estado utilizando esta crisis como pretexto para hacer añicos las políticas de igualdad, haciendo de la salud y los derechos sexuales y reproductivos un elemento marginal de la salud pública o incluso eliminando este ámbito por completo de sus políticas. La IPPF ha denunciado que, amparados por la pandemia, los movimientos contrarios a la SDR han estado difundiendo informaciones falsas, reafirmando valores tradicionales y promoviendo medidas retrógradas contra la salud y los derechos sexuales y reproductivos.

En mayo, por ejemplo, el gobierno estadounidense desató la indignación internacional al exigir la eliminación de la salud y los derechos sexuales y reproductivos del Plan Mundial de Respuesta Humanitaria al COVID-19 de Naciones Unidas (documento en español), una actuación descrita por Akila Radhakrishnan, presidenta del Global Justice Center, como «un ataque vergonzoso y peligroso contra servicios de salud básicos en el peor momento posible».

“Un ataque vergonzoso y peligroso contra servicios de salud básicos en el peor momento posible»

Akila Radhakrishnan, presidenta del Global Justice Center

Dancil Uwimana, de 29 años, procedente de Ngozi, Burundi, tiene tres hijos pequeños y es educadora de pares en VIH. Burundi tiene altas cifras de mortalidad infantil y materna: uno de cada trece menores está en riesgo de morir antes de su quinto cumpleaños.

[Fuente NCB]

Imagen: IPPF/Georgina Goodwin/Burundi



La financiación en caída libre

Las amenazas a la salud y los derechos sexuales y reproductivos no siempre son impulsadas por instintos malignos. Muchas personas temen que [el impacto de la caída de los ingresos fiscales](#) y la recesión sobre los presupuestos de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) harán que se ‘arrincone’ a la salud y los derechos sexuales y reproductivos, en tanto que los gobiernos debaten qué recortar, qué salvar y cómo lograr la recuperación económica.

El descenso más leve en la financiación podría tener consecuencias desastrosas para los países de renta baja, en los que un abrumador [35,7 por ciento del total del gasto en salud y casi un 50 por ciento del gasto en abastecimiento de métodos](#) anticonceptivos proceden de la ayuda al desarrollo.

Con el COVID-19 reconfigurando las opiniones y poniendo en valor los sistemas sanitarios operativos, existe el peligro de que [los debates sobre qué se consideran «servicios esenciales»](#) vuelvan a dejar en la sombra la salud y los derechos sexuales y reproductivos y debiliten los esfuerzos para consolidar su lugar en la atención sanitaria universal.

El equipo de investigación del Instituto Guttmacher calcula que incluso un simple [descenso del 10 por ciento en el acceso a los servicios básicos de salud sexual y reproductiva \(SSR\)](#) conllevaría que el número de mujeres sin acceso a métodos anticonceptivos aumentara en 49 millones, con el resultado de 15 millones adicionales de embarazos no planificados al año. Asimismo, estiman que los recortes en la asistencia sanitaria relacionada con el embarazo y la atención neonatal podrían resultar en 168.000 muertes neonatales y 28.000 muertes maternas anuales adicionales.

Avanzando con audacia por la salud y los derechos sexuales y reproductivos

Es crucial preservar la presencia de la SDR en la respuesta a la pandemia y proteger el extraordinario progreso logrado hacia la integración de la igualdad de género y la SDR en las políticas de desarrollo internacionales.

Mientras que la crisis del COVID-19 ha visto cómo la salud y los derechos sexuales y reproductivos sufrían los ataques constantes de fuerzas conservadoras, a menudo acompañados de giros políticos hacia el aislacionismo y del señalamiento de organizaciones internacionales o rivales políticos como chivos expiatorios, muchos otros gobiernos se han unido para defender la SDR y apoyarse entre ellos.

En mayo, 59 países (36 de ellos, europeos) publicaron una declaración en la que subrayaban la necesidad de proteger la salud y los derechos sexuales y reproductivos y de promover la perspectiva de género en los esfuerzos contra la pandemia.

En Europa, como en la mayoría de continentes, convive un espectro de distintas posiciones gubernamentales sobre la SDR que abarcan desde la más progresista hasta la ultraconservadora. Los gobiernos más liberales del continente consideran que es vital consagrar la presencia de la SDR en la respuesta a la pandemia y proteger el extraordinario progreso hacia la integración de la igualdad de género y la salud y los derechos sexuales y reproductivos en las políticas de desarrollo internacionales que se ha logrado desde la primera Conferencia Internacional sobre Población de 1994.

Muchos incluso hacen un llamamiento a tomar nuevas medidas innovadoras para proteger la salud y los derechos sexuales y reproductivos de miles de millones de personas y a trabajar conjuntamente desde todos los países y sectores para lograrlo.

Entre los defensores de esta postura se encuentran 12 gobiernos europeos y la Comisión Europea, a los que se ha entrevistado recientemente sobre su visión de la SDR como parte de una consulta organizada por Countdown 2030 Europe, un consorcio de ONG europeas dedicadas a los derechos humanos y las necesidades insatisfechas en materia de planificación familiar en el mundo.

Estos gobiernos han dedicado años a luchar por la igualdad de género y la salud y los derechos sexuales y reproductivos, dentro de sus fronteras y en los programas de desarrollo que apoyan en el mundo. Sus prioridades y tácticas varían, pero todos coinciden en entender la SDR como parte integral de los derechos humanos y la igualdad de género (según se establece en declaraciones de derechos humanos internacionales y europeas) y como un aspecto central de la salud pública y el desarrollo.

Mientras la crisis a la que se enfrenta el mundo aumenta la presión sobre los presupuestos internacionales y nacionales, estos gobiernos están decididos a proteger su visión progresista de la salud y los derechos sexuales y reproductivos, como parte del impulso de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 y más allá.

Más allá de la planificación familiar

Muchos gobiernos europeos ponen la promoción del acceso universal a los métodos anticonceptivos en el centro de sus agendas sobre SDSR, guiados por la convicción de que garantizar el derecho al acceso a la información y los servicios relacionados con la anticoncepción es fundamental para lograr la igualdad de género y el desarrollo humano.

Para los gobiernos más progresistas de Europa, entrevistados en la consulta de Countdown 2030 Europe, su visión de la salud y los derechos sexuales y reproductivos va más allá del acceso a la planificación familiar y la anticoncepción. Apoyan una visión audaz y progresista que abarca también la educación, los puestos de trabajo, el ocio y todos los ámbitos de la vida de las personas, y que en muchos casos se basa en la definición integral de SDR presentada en 2018 en el [informe Guttmacher-Lancet](#).

Respecto a las políticas internacionales y de desarrollo, la igualdad de género y la salud y los derechos sexuales y reproductivos no son accesorios que pueden añadirse a los planes una vez que se ha definido todo lo demás: son el sustento de la salud, los derechos humanos y el desarrollo.



Abigail Ekouevi, de 17 años, habla con su matrona sobre métodos anticonceptivos en una clínica de Atakpame, Togo. El uso de anticonceptivos sigue siendo bajo en Togo, principalmente debido al escaso suministro de servicios, la desigualdad de género y la pobreza. Un tercio de las personas en edad reproductiva no tienen acceso a métodos anticonceptivos. En las comunidades rurales, la cifra es todavía mayor. [Fuente UNFPA; blog de la IPPF]. Imagen: IPPF/Xaume Olleros/Togo

Hincapié en las personas en situación de marginalidad

En el frente y en el centro están, también, las personas más susceptibles de tener que luchar para acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva. La Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 hace un gran hincapié en «no dejar a nadie atrás», vigilando de cerca la marginalización, la opresión y la violencia que a menudo sufren las mujeres, las personas jóvenes, las personas LGBTI+, las personas refugiadas o quienes viven con discapacidades, entre muchas otras.

Esto implica reconocer la esencial naturaleza interseccional de la identidad humana: identificar cómo factores como la edad, el género, la sexualidad y la discapacidad pueden confluir para hacer que una persona se encuentre en una situación de mayor marginalidad y acaben afianzando las formas en las que se la excluye de determinados servicios.

Es una perspectiva que guía el trabajo de muchos ministerios de desarrollo en Europa y que es extremadamente importante en Estados frágiles y propensos a sufrir conflictos. Llegar a aquellas personas que suelen ser ignoradas o excluidas de los servicios requiere una verdadera dedicación a comprender cómo las distintas personas se mueven e interactúan en el mundo y en la SDSR.

Por ejemplo, Finlandia ha observado cómo cambian las necesidades de salud y derechos sexuales y reproductivos de una persona a lo largo de su vida, mientras que la Comisión Europea y países como Bélgica, Finlandia, Holanda, Noruega y Suiza, entre otros, han estado trabajando en programas para dar respuesta a las necesidades de la juventud, una población a menudo ignorada o marginada en lo que a la prestación de servicios de salud y derechos sexuales y reproductivos se refiere. El gobierno suizo, por su parte, ha estado desarrollando con la IPPF y UNAIDS el proyecto ACT12030, un programa que pone en contacto a jóvenes de África, Asia, Europa y América Latina para buscar carencias de datos en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos, como parte del impulso para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Suecia, mientras tanto, ha estado aplicando una sistemática perspectiva de igualdad de género en toda su agenda de política exterior, con el lanzamiento en 2014 de una «política exterior feminista», la primera en el mundo. Esta se basa «en hechos y estadísticas del día a día de mujeres y niñas» y tiene en cuenta cómo sus derechos, su representación en la toma de decisiones y su acceso a recursos se ven afectados por el género. Francia siguió este ejemplo con su propia política exterior feminista en 2019 y pretende asignar 700 millones de euros anuales a la financiación de programas de desarrollo para la igualdad de género de aquí a 2022.

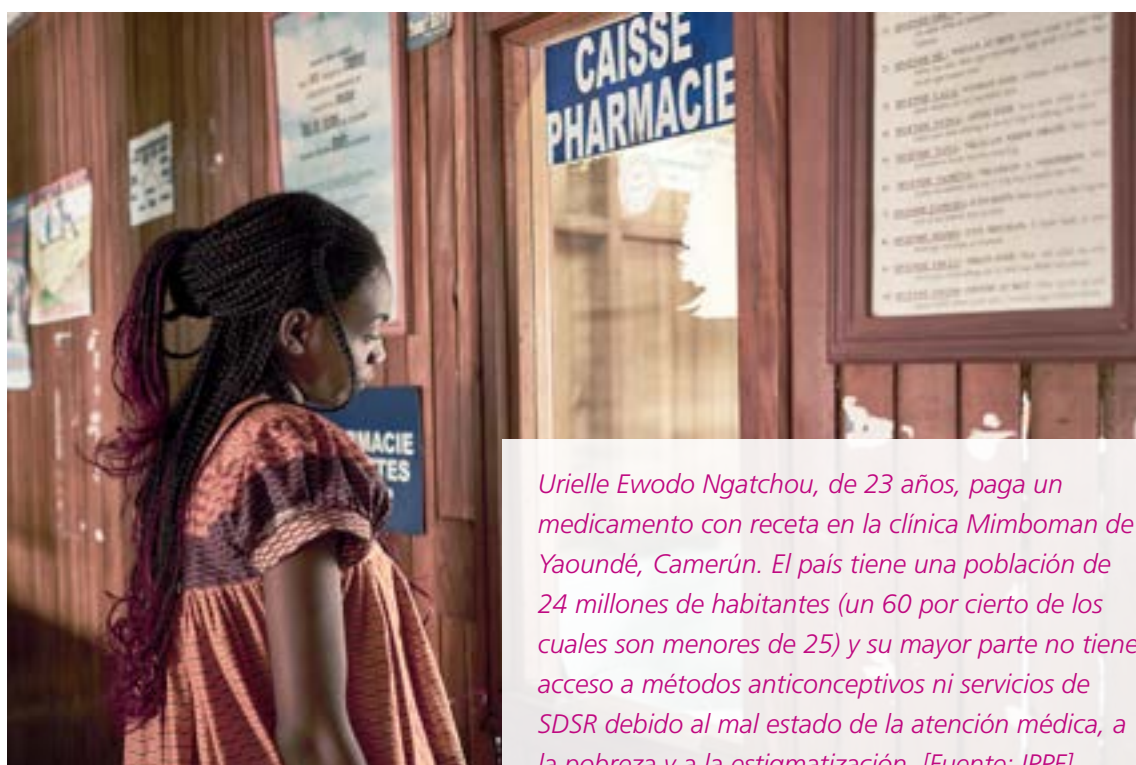
Resultados locales, relevancia global

Para muchos gobiernos europeos, las agendas progresistas sobre salud y derechos sexuales y reproductivos a nivel nacional pueden ser fuente de inspiración para la mejora los programas de desarrollo en los que trabajan con otros países. Alemania, Bélgica y España, por ejemplo, han incorporado la salud sexual y reproductiva en la cobertura sanitaria universal desde hace tiempo, mientras que el empoderamiento de las mujeres ha sido una prioridad nacional para los países nórdicos desde hace décadas.

Las lecciones aprendidas a partir de estas políticas pueden ayudar a dar forma a políticas de desarrollo basadas en derechos, especialmente en Estados frágiles o socialmente conservadores y con una precaria infraestructura de salud pública, una débil aplicación de la salud y los derechos sexuales y reproductivos, sistemas legales descompuestos y pocas perspectivas educativas y laborales para mujeres y niñas.

Por supuesto, los contextos varían: no hay un modelo de «talla única».

Asimismo, es esencial que los gobiernos europeos continúen alimentando relaciones igualitarias y equilibradas con los países socios, [asegurándose de que la ayuda está rigurosamente alineada \(enlace en español\)](#) con las necesidades, los contextos y los sistemas de quienes la reciben.



Urielle Ewodo Ngatchou, de 23 años, paga un medicamento con receta en la clínica Mimboman de Yaoundé, Camerún. El país tiene una población de 24 millones de habitantes (un 60 por ciento de los cuales son menores de 25) y su mayor parte no tiene acceso a métodos anticonceptivos ni servicios de SDR debido al mal estado de la atención médica, a la pobreza y a la estigmatización. [Fuente: IPPF] Imagen: IPPF/Xaume Olleros/Camerún

Aprender de los errores

Aprender de los errores también es fundamental. La situación de la salud y los derechos sexuales y reproductivos en Europa no es perfecta. La estigmatización, la marginalización y la pobreza siguen creando barreras para la atención sanitaria y el ejercicio de los derechos de muchas personas en todo el continente. La crisis del COVID-19 y las protestas de Black Lives Matter han puesto en el punto de mira el hecho de que el género, la clase y la identidad étnica, así como el racismo sistémico en la asistencia sanitaria, pueden [afectar gravemente al acceso a la atención sanitaria](#), incluidos los servicios de SDR, y las tasas de mortalidad. En el Reino Unido, por ejemplo, [las mujeres negras tienen cinco veces más probabilidades que las mujeres blancas de morir](#) por complicaciones en el embarazo, de acuerdo con [un estudio de 2019 de la Universidad de Oxford](#).

La lucha por la igualdad de género y racial en Europa tiene mucho camino por delante. Pero abrirse a aprender lo que enseñan las experiencias europeas de cómo los factores sociales y económicos pueden marginar a las personas y qué hacer para afrontarlos, puede ayudar a que los gobiernos europeos sean socios más eficaces para otros países en materia de desarrollo, así como a defender la SDR en los debates internacionales.



La matrona Ahmed Mohamed Haid en la Asociación de Salud para la Familia de Somalia (SOFHA) en Hargeisa. La clínica ofrece una serie de servicios clínicos y psicosociales, incluido el asesoramiento para mujeres que han sido sometidas a mutilación genital femenina, una práctica que afecta a casi todas las mujeres en Somalia. [Fuente: IPPF]

Imagen: IPPF/Zoe Flood/Somaliland

La lucha global por la justicia de género

Como han puesto en evidencia las batallas por la inclusión de la SDSR en la respuesta humanitaria al COVID-19, la lucha global para que todas las personas ejerzan su derecho a la salud y los derechos sexuales y reproductivos no ha terminado en absoluto.

Teniendo esto en mente, muchos gobiernos europeos tienen previsto aplicar un enfoque doble para proteger la SDSR durante la próxima década: por un lado, centrándose en los mecanismos concretos del desarrollo de programas y, por otro, haciendo que las voces progresistas se escuchen altas y claras en las políticas globales.

En los últimos años ha surgido un movimiento bien organizado y cada vez más fuerte de oposición a la salud y los derechos sexuales y reproductivos, con redes de delegados ejerciendo presión en Naciones Unidas y en los países europeos para diluir el lenguaje sobre la SDSR en las declaraciones y agendas políticas. Gobiernos conservadores, activistas contra el derecho a decidir, grupos políticos de extrema derecha y extremistas cristianos, así como los donantes y estrategias digitales que les apoyan desde bambalinas, hacen esfuerzos cada vez más coordinados y con mayor influencia para oponerse a las libertades sexuales, los derechos y la igualdad de género, y para convertir a otras personas a su manera de pensar.

Este movimiento ha tomado un nuevo impulso con la decisión de Donald Trump de retirar la financiación estadounidense del Fondo de Población de Naciones Unidas en 2017, y se ha envalentonado con el renacimiento del populismo de derechas, la misoginia y un agresivo activismo «en contra del despertar» que tiene la igualdad racial y de género en el punto de mira.

Los gobiernos europeos afirman que la lucha contra esta oposición que llevaron a cabo en la Cumbre de Nairobi los 55 Estados participantes, respaldados por las formidables voces de la sociedad civil, supuso una importante victoria para quienes están trabajando en reorientar las sociedades y el desarrollo hacia una mayor igualdad de género.

Pero también reconocen que no hay lugar para la autocomplacencia, especialmente ahora que el COVID-19 está acaparando los presupuestos nacionales y de Naciones Unidas, desplazando a la salud sexual y los derechos sexuales y reproductivos fuera de los debates políticos y encubriendo a las Administraciones retrógradas para que promulguen leyes en contra de la SDSR.

También se teme que los movimientos coercitivos retrógrados estén tan bien organizados que logren movilizar más resistencia desde países que antes no se oponían a la salud y los derechos sexuales y reproductivos. La lucha contra esta tendencia requiere coaliciones y movimientos globales como SheDecides (Ella decide), así como comunicación y esfuerzos claros para conseguir apoyo de nuevos aliados, entre ellos los gobiernos y la sociedad civil, junto con las personas jóvenes con influencia en las redes y con conocimientos sobre las nuevas tecnologías.

Nuevas y audaces alianzas

Para proteger y promover la SDR se debe luchar en muchos frentes a la vez. Pero el elemento común en todos ellos, de acuerdo con los gobiernos europeos, es la idea de trabajar en colaboración, tanto con alianzas ya establecidas como con nuevas alianzas.

Los gobiernos en Europa ya hace tiempo que apoyan programas de SDR basados en diversas colaboraciones y canales, incluidos el sistema multilateral y las agencias de Naciones Unidas, la cooperación entre gobiernos o con las organizaciones de la sociedad civil (OSC), e iniciativas globales como el Fondo Mundial de lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria.

Hoy, lejos de retirarse hacia el aislacionismo y el proteccionismo ante las amenazas, los gobiernos europeos apoyan con entusiasmo la colaboración como rasgo central de la estrategia de defensa de la salud y los derechos sexuales y reproductivos (y del desarrollo en general) para 2030 y más allá.

Desde importantes iniciativas multilaterales con grandes logros globales hasta nuevas coaliciones innovadoras procedentes de la investigación, la sociedad civil, el gobierno, las universidades, el sector privado y la innovación digital, los gobiernos europeos se comprometen a apoyar estas alianzas.

Este es, dicen, el mejor camino para dar nueva forma al desarrollo global de manera que refleje y aborde mejor las necesidades de salud y derechos sexuales y reproductivos de nuestra diversa comunidad global y que consolide la SDR frente a los riesgos.

Pragmatismo para cerrar brechas

Y también se trata de pragmatismo. Ante la previsión de que la financiación de la Ayuda Oficial al Desarrollo caiga en picado en la próxima década, gobiernos y estrategias deberán actuar con creatividad, compartir su experiencia y trabajar de forma conjunta para cerrar brechas y resolver los asuntos pendientes.

La valiosa experiencia de los gobiernos europeos con «alianzas de múltiples partes» será fundamental. Esta jerga del ámbito del desarrollo, ya muy usada, incluye todo tipo de colaboraciones, mostrando la fuerza que puede obtenerse cuando elementos diferentes se unen. Los diálogos entre gobiernos, sociedad civil, agencias de Naciones Unidas y otras partes han sido y seguirán siendo decisivos para acelerar el apoyo global a la salud y los derechos sexuales y reproductivos.

Por ejemplo, [una nueva coalición global sobre SDR y autonomía del cuerpo es una de las seis coaliciones de acción respaldadas por Naciones Unidas \(enlace en español\)](#) que reúnen a Estados miembros, movimientos de mujeres, sociedad civil, sector privado y líderes de la juventud para impulsar soluciones específicas para las mujeres jóvenes y adolescentes.

La colaboración con la sociedad civil sigue siendo crucial. Para muchos gobiernos donantes las organizaciones de la sociedad civil son los ojos y oídos sobre el terreno, una forma rápida de entender los contextos locales, la cultura y las necesidades y poder hacer que el desarrollo sea más significativo y efectivo.

“Las ONG tienen un papel esencial en la presión y la incidencia política, así como en la provisión de servicios. Es por ello que consideramos importante colaborar y financiar las alianzas con organizaciones de la sociedad civil del ámbito de la salud y los derechos sexuales y reproductivos” declaran Mette Gonggrijp, directora de Desarrollo Social y embajadora de Igualdad de Género y Derechos de las Mujeres, y Rineke van Dam, responsable senior de políticas de SDR del Ministerio de Asuntos Exteriores de Holanda.

Las organizaciones de la sociedad civil también son importantes órganos de control con su seguimiento del avance de los compromisos globales. Además, tal y como dicen gobiernos europeos, juegan un papel crucial en la lucha contra las informaciones falsas difundidas por quienes intentan debilitar los esfuerzos por la salud y los derechos sexuales y reproductivos, contribuyendo a desmenuzar la terminología y asegurándose de que la población tenga acceso a información precisa.

Más allá de los sospechosos habituales



Chamiya Al Mohamad es una voluntaria que ejerce como educadora de pares con personas refugiadas de Siria que viven en un campamento de Saadnayel, en el Valle de la Becá del Líbano. Imparte sesiones de educación sexual integral en el campamento. El millón y medio de personas refugiadas que viven en el Líbano a menudo tienen dificultades para acceder a servicios de SDR, una situación que ha empeorado por la pandemia de COVID-19 y el cierre de clínicas. [Fuente: Al Jazeera; IPPF]

Imagen: IPPF/Hannah Maule-ffinchi/ Líbano

Conseguir que los distintos ministerios trabajen conjuntamente de forma más eficaz en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos es otro punto esencial. Por poner un ejemplo, podrían analizar cómo los servicios de agua, saneamiento e higiene pueden [servir mejor a las necesidades de mujeres y niñas en materia de SDR y necesidades relacionadas con la menstruación.](#)

La educación y la salud y los derechos sexuales y reproductivos forman otra intersección: los gobiernos europeos están empezando a utilizar programas de educación para fomentar el acceso a la SDR mediante planes de educación sexual integral (ESI) y cursos de capacitación profesional —y asegurándose de que los hombres y niños también formen parte de estas conversaciones.

Asimismo, las colaboraciones con el sector privado son una parte fundamental y cada vez más presente de este panorama, tanto por sus recursos y conocimientos como por su papel en la financiación en materia de desarrollo y su participación en el diseño de tecnologías y enfoques innovadores para hacer que la salud sexual y reproductiva sea más accesible.

Los gobiernos europeos llaman la atención sobre la necesidad de investigar más para entender mejor cómo sacar el mayor provecho de estas colaboraciones. En este contexto cambiante, será importante aprovechar las contribuciones del sector privado, pero también es importante la protección contra los posibles riesgos que implica su participación, incluidas las cargas financieras impuestas a las personas como resultado de las altas facturas médicas de proveedores privados.

Countdown 2030 Europe ha estudiado el creciente papel del sector privado en el ámbito de la salud y los derechos sexuales y reproductivos y el desarrollo, y tiene un gran interés en que se garantice que en esta creciente tendencia de los gobiernos donantes de trabajar con el sector privado en este ámbito, mantendrán sus compromisos de no dejar a nadie atrás y garantizar el acceso de los grupos marginados a través de sus programas.

Las colaboraciones con el mundo académico y de la innovación digital también son un área muy interesante. Estas podrían abrir nuevos caminos en la investigación en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos, y ayudar a diseñar servicios y sistemas digitales inteligentes para supervisar las grandes cantidades de datos que se manejan en los procesos de seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La unión hace la fuerza

En diciembre, la [Dra. Natalie Kanem](#), directora ejecutiva del Fondo de Población de Naciones Unidas, habló de «una creciente ola retrógrada que amenaza con eliminar los derechos que mujeres y niñas tienen sobre sus cuerpos, sus decisiones y sus vidas».

Mucho antes de que golpeará el COVID-19, numerosas amenazas locales y globales estaban frenando la agenda global de salud y derechos sexuales y reproductivos. Actualmente, con diversas crisis que amenazan con agravar la pobreza, profundizar las desigualdades y cortar la financiación para la SDSR, la necesidad de que la comunidad mundial se enfrente de manera conjunta a estas amenazas, guiada por una visión de la SDSR inclusiva y basada en los derechos, es cada día más urgente.

La pandemia de COVID-19 ha revelado la fragilidad de nuestros sistemas de salud y sociales y la rapidez con la que los logros obtenidos con tanto esfuerzo pueden deshacerse cuando se enfrentan a eventos catastróficos y globales. La fragmentación y las relaciones conflictivas en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas están obstaculizando la coordinación entre los gobiernos más poderosos del mundo, entre ellos gobiernos que se oponen con fiereza a la salud y los derechos sexuales y reproductivos.

Hoy más que nunca es fundamental que los gobiernos europeos se unan para proteger los ambiciosos programas de SDSR basados en derechos que han estado defendiendo durante tanto tiempo junto con gobiernos progresistas de otras regiones y con organizaciones multilaterales.

Los gobiernos deben hacer honor a los compromisos acordados en Nairobi y Nueva York, y apoyar las medidas en favor de la SDSR en otros países y comunidades, como parte de sus esfuerzos hacia los objetivos del 2030. La acción diplomática conjunta es hoy más necesaria que nunca para garantizar que las normas internacionales promueven el máximo nivel de SDSR posible y para incentivar la financiación necesaria para dar respuesta a las crecientes necesidades de SDSR. Es crucial también que los gobiernos europeos afronten las crisis actuales como oportunidades para innovar, para replantearse cómo funciona la sociedad y para hacer avanzar la agenda de SDSR de forma más integral y responsable, con sistemas robustos de seguimiento de los avances y la financiación.

Las cada vez más numerosas demandas globales para «reconstruir mejor» solo llegarán a buen puerto si logran generar esfuerzos reales para replantearse la estructura sanitaria global y el modo en que la cooperación internacional puede apoyar mejor a los miles de millones de vidas que afecta.

Trabajar conjuntamente para lograrlo requerirá actuar con audacia y tener la mente abierta a nuevas ideas y colaboraciones, tomando como base el enérgico movimiento avivado en Nairobi hace unos meses.

No será tarea fácil. Pero si la humanidad quiere prosperar, los gobiernos deben hacer todo lo posible para materializar esta visión de los derechos sexuales y reproductivos. El bienestar de miles de millones de personas depende de ello, hoy y para las generaciones que vendrán.

Este artículo es el resultado de una consulta con los ministerios de asuntos exteriores y las agencias de desarrollo de Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Holanda, Irlanda, Noruega, Reino Unido, Suecia y Suiza y con las instituciones de la UE. El análisis se basa en documentos políticos e ideas surgidas de conversaciones con representantes gubernamentales en abril y mayo de 2020.

El análisis completo está disponible en inglés en el enlace:

<https://countdown2030europe.org/index.php/resources/supporting-sexual-and-reproductivehealth-and-rights-beyond-2020-european-vision>

Este artículo también está disponible en la web:

<https://countdown2030europe.org/index.php/rights-under-pressure>

Para más información sobre Cuenta atrás 2030 Europa, visite nuestro sitio web www.countdown2030europe.org o póngase en contacto con nosotros a través de la dirección countdown2030europe@ippfen.org.



PARTICIPE EN EL DEBATE
@C2030Europe